



Declaración sobre la situación geopolítica y sus consecuencias para las personas trabajadoras

Adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 19 y 20 de mayo de 2026

La CES expresa su profunda preocupación por la actual situación geopolítica y la escalada de conflictos, así como por sus consecuencias de gran alcance para los trabajadores y trabajadoras de Europa y de todo el mundo. Los conflictos en curso y el empeoramiento de las relaciones internacionales corren el riesgo de conducir a un mundo cada vez más brutalizado, más duro y más violento, debido a la exposición repetida a guerras, injusticias y sufrimiento. La UE no puede renunciar a su objetivo declarado de promover la paz y sus valores.

La CES reitera su llamamiento a una desescalada por parte de todos los implicados en el conflicto de Oriente Medio, a un alto el fuego inmediato y completo y a una vuelta a la diplomacia y al diálogo, así como al pleno respeto del derecho internacional, con el fin de evitar más pérdidas de vidas humanas y lograr la paz. Las acciones militares unilaterales llevadas a cabo por EE. UU. e Israel y la posterior represalia por parte de Irán contra Estados independientes constituyen graves ataques contra el orden internacional basado en normas. Estas acciones siguen socavando el orden internacional y contribuyen a la catástrofe humanitaria que persiste en Gaza y en toda la región. La CES reafirma asimismo su solidaridad con el pueblo ucraniano y su apoyo a las personas trabajadoras y a los sindicatos de Ucrania, así como su llamamiento a que se alcance una paz justa y duradera junto con Ucrania. La CES recuerda que la seguridad debe basarse en la diplomacia, la prevención de conflictos y el progreso social, y no en la escalada militar. El derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza militar, y el diálogo sobre una carrera armamentística descontrolada, especialmente en lo que respecta a las armas nucleares. No hay paz duradera sin justicia social y respeto por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Con su guerra de agresión ilegal y en curso contra Ucrania, Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa. Al mismo tiempo, la democracia y los derechos fundamentales están siendo objeto de ataques cada vez mayores por parte de los autoritarios de todo el mundo, amplificadas por la elección de Donald Trump. Las recientes acciones de Estados Unidos, desde la agresión militar ilegal en Venezuela hasta la imposición de aranceles comerciales, las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia, la escalada



militar que afecta a Irán y las restricciones que afectan a los envíos de petróleo y la injerencia en países como Cuba, reflejan una lógica creciente de política de poder y control de los recursos. Estos acontecimientos debilitan los marcos multilaterales y agravan el aumento de la inestabilidad.

Estas tensiones geopolíticas están cada vez más impulsadas por la competencia por la energía y las materias primas, lo que impulsa la inflación y profundiza la inestabilidad mundial. La situación en el estrecho de Ormuz pone aún más de manifiesto las vulnerabilidades de Europa, con graves riesgos para el suministro energético, las vías de transporte y el comercio mundial, mientras que miles de marineros se enfrentan a condiciones cada vez más peligrosas y precarias. Las trabajadoras y trabajadores europeos se ven directamente afectados por la volatilidad y el aumento de los precios de la energía, la disminución del poder adquisitivo y la mayor presión sobre las industrias, mientras que algunas empresas multinacionales siguen acumulando beneficios extraordinarios.

Las crisis geopolíticas se están convirtiendo cada vez más en crisis alimentarias, lo que genera riesgos relacionados con la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos, así como con la especulación, especialmente para los países que dependen de las importaciones de alimentos. Por lo tanto, la seguridad alimentaria debe considerarse una cuestión estratégica. Esto subraya la urgente necesidad de pasar de un modelo basado en los conflictos y la extracción a un modelo centrado en la paz, la autonomía estratégica, la justicia social y el empleo de calidad, gracias a una planificación social e industrial a largo plazo que garantice una prosperidad y una estabilidad sostenibles.

La reacción de las instituciones de la UE en 2026 no ha estado a la altura de los retos a los que se enfrentan las y los trabajadores y la sociedad, repitiendo muchas de las deficiencias puestas de manifiesto durante la crisis energética de 2022-2023 tras la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Europa se enfrentó entonces a perturbaciones similares, pero la respuesta resultó insuficiente. La reforma del mercado eléctrico no proporcionó una protección estructural contra la volatilidad de los precios, ni garantizó una desvinculación duradera de los precios de la energía descarbonizada respecto a los combustibles fósiles. Del mismo modo, el impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios introducido durante la crisis no se ha convertido en permanente ni ha sido fácilmente reactivable, mientras que la expansión de la producción de energía renovable y descarbonizada sigue siendo insuficiente. Se ha perdido un tiempo valioso.

Cada día de retraso en la toma de decisiones tiene consecuencias concretas: los beneficios extraordinarios siguen fluyendo de las personas trabajadoras y las empresas hacia las grandes compañías energéticas, mientras que el aumento de los costes de los insumos alimenta la inflación, debilita el poder adquisitivo y aumenta la presión sobre las industrias y los servicios públicos. Es imperativo aprender de estos fracasos y poner en marcha urgentemente un marco de gobernanza económica reformado, inversiones reforzadas con condicionalidades sociales, herramientas permanentes de gestión de crisis que den prioridad a la protección de las personas trabajadoras y una nueva gobernanza del mercado eléctrico.

La CES pide, por lo tanto, un cambio fundamental en la política de la UE y que las



instituciones de la UE convoquen urgentemente una cumbre con los interlocutores sociales para debatir las crisis actuales y las acciones necesarias. La Comisión Europea debe tomar conciencia de la gravedad de la situación y reforzar su respuesta en consecuencia. Sin una política europea mucho más proactiva en materia de industria, energía e inversión, Europa corre el riesgo de volver a sufrir las mismas crisis y de seguir expuesta a las mismas vulnerabilidades. La creciente inseguridad económica, las desigualdades y la inestabilidad crean las condiciones políticas propicias para el auge de las fuerzas antidemocráticas. A nivel europeo y nacional, esta crisis debe gestionarse mediante un diálogo social reforzado que conduzca a un mayor progreso social. Los gobiernos no deben debilitar la ambición climática, la política industrial o la inversión social en respuesta a los crecientes retos de seguridad.

Las normas fiscales deben suspenderse para permitir ayudas de emergencia y reformarse para permitir una inversión pública sostenida que impulse la renovación industrial y la autonomía estratégica. En el marco reformado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las medidas destinadas a apoyar a los trabajadores y trabajadoras afectados por la crisis energética deberían excluirse de los cálculos del déficit. A medida que NextGenerationEU llega a su fin, resulta aún más urgente establecer herramientas de inversión comunes permanentes, incluso mediante la emisión de bonos comunes denominados en euros, con el objetivo de desarrollar la capacidad fiscal europea.

Los instrumentos de crisis no deben ser improvisaciones temporales, sino instrumentos permanentes listos para ser activados cuando sea necesario. Debe crearse un instrumento europeo permanente, basado en el éxito del mecanismo SURE, para proteger el empleo y los ingresos durante las crisis y las transiciones.

Son necesarios aumentos salariales para hacer frente a la crisis del coste de la vida, reducir la dependencia de las exportaciones y aumentar la demanda interna, apoyando así el crecimiento sostenible. La UE debe, respetando plenamente los sistemas nacionales de relaciones laborales y la autonomía de los interlocutores sociales, garantizar la transposición ambiciosa y completa de la Directiva sobre salarios mínimos adecuados y planes de acción sólidos por parte de los Estados miembros para alcanzar el objetivo de una cobertura de la negociación colectiva del 80 %.

La respuesta debe basarse en la solidaridad social, una intervención pública firme y una distribución justa de los costes. Deben adoptarse medidas específicas para proteger a los hogares con ingresos bajos y medios, afectados de manera desproporcionada por la crisis, que no pueden ajustar fácilmente sus patrones de consumo a corto plazo.

Es inaceptable que las empresas obtengan beneficios extraordinarios a costa de las dificultades generalizadas. Es urgente controlar los precios. Una congelación temporal de los márgenes de beneficio en el sector energético —con un límite máximo en los niveles previos a la crisis a partir de febrero— es un paso esencial para garantizar que los precios reflejen los costes reales en lugar de márgenes oportunistas. Los beneficios extraordinarios sobre la energía y otros bienes esenciales deben gravarse de forma efectiva y permanente. Quienes disponen de mayores recursos deben contribuir en mayor medida. El aumento del gasto en seguridad no debe utilizarse para justificar recortes en la sanidad, las pensiones y la protección social. Los fondos sociales y de



cohesión de la UE, incluidos el FSE+ y el Fondo de Cohesión, no deben reasignarse para subvencionar gastos militares. La CES reitera su demanda de sistemas fiscales más progresivos y de una directiva de la UE sobre el impuesto sobre el patrimonio.

La UE también debe reformar urgentemente el mercado de la electricidad para desvincular la energía descarbonizada de los precios de los combustibles fósiles y garantizar una energía asequible para todos. Las respuestas a la crisis deben evitar esta vez apuntalar la demanda de combustibles fósiles y, en su lugar, dar prioridad al ahorro energético, la eficiencia y las alternativas libres de combustibles fósiles.

Puesto que se está promoviendo de nuevo el teletrabajo para mitigar el aumento de los costes de la energía y el combustible para las personas trabajadoras y las empresas, esto subraya la urgencia de reforzar las protecciones en materia de teletrabajo y el derecho a la desconexión a través de la próxima Ley de la UE sobre Empleos de Calidad. Al mismo tiempo, la crisis actual también demuestra el papel esencial del transporte público asequible y accesible en la reducción de los costes para las trabajadoras y los trabajadores y apoyar una organización del trabajo más justa y sostenible.

Es urgente adoptar medidas para combatir la pobreza energética, incluida la prohibición de los cortes de suministro y la garantía de ayudas a los hogares más vulnerables. También es importante introducir una normativa de alquileres más protectora y un control del mercado para proteger a las y los inquilinos contra la explotación y los abusos, poner fin a los desahucios sin causa justificada y proteger a las familias vulnerables, así como congelar o frenar el aumento de los precios de los alquileres.

Acelerar la electrificación y la inversión en energías renovables es esencial para lograr la autonomía estratégica, la estabilidad de los precios y la creación de empleo de calidad. Europa debe pasar de una gestión reactiva de las crisis a un enfoque proactivo y estructural que proteja a las personas trabajadoras, ofrezca servicios públicos adecuados y garantice una transición justa.

Europa no puede seguir con un sistema que deja las crisis repetidas sin gestionar y abandonadas a las fuerzas del mercado, haciendo que los trabajadores y las trabajadoras sufran el coste. La CES aboga por una Europa resiliente y justa que ponga a las personas primero, y seguirá reforzando la solidaridad y la cooperación con la CSI y las organizaciones sindicales regionales en defensa de la paz, la democracia, la justicia social y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo.

Traducido por Internacional CEC UGT